Señores

**JUZGADO DIECINUEVE (19°) CIVIL MUNICIPAL DE CALI**

[j19cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:j19cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co)

|  |  |
| --- | --- |
| **REFERENCIA:** | VERBAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL |
| **DEMANDANTE:** | LIGIA BENJUMEA DE BOTERO Y OTROS |
| **DEMANDADO*:*** | COSMOCENTRO CIUDADELA CENTRO COMERCIAL P.H. Y OTRO |
| **RADICACIÓN:** | 760014003019-**2024-00167**-00 |

**ASUNTO: CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA**

**ANA MARÍA BARÓN MENDOZA,** mayor de edad, vecina y residente en la ciudad de Bogotá, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.019.077.502 expedida en la ciudad de Bogotá, abogada en ejercicio y portadora de la Tarjeta Profesional No. 265.684 del Consejo Superior de la Judicatura, con dirección de notificaciones en [anamariabaronmendoza@gmail.com](mailto:anamariabaronmendoza@gmail.com) en mi calidad de apoderada especial **COSMOCENTRO CIUDADELA CENTRO COMERCIAL P.H.** identificada con NIT. 890.320.980-5. Mediante el presente escrito procedo a **CONTESTAR LA DEMANDA** de Responsabilidad Civil Extracontractual promovida por los señores LIGIA BENJUMEA DE BOTERO Y OTROS en contra de COSMOCENTRO CIUDADELA CENTRO COMERCIAL P.H. Y OTRO, para que en el momento en que se vaya a definir el litigio se tengan en cuenta los hechos y precisiones que se hacen a continuación, según las pruebas que se practiquen, anticipando que me opongo a todas y cada una de las pretensiones sometidas a consideración de su Despacho, en los siguientes términos:

# FRENTE A LOS HECHOS DE LA DEMANDA:

**FRENTE AL HECHO “1”:** El presente hecho tiene varias afirmaciones, y me pronuncio a cada una de ellas así:

* A mi procurada no le constan de manera directa las circunstancias descritas por la parte demandante, comoquiera que las razones por las cuales la señora Benjumea de Botero se encontraba en las instalaciones de la ciudadela comercial, es un aspecto propio de la esfera íntima y personal de los actores. En consecuencia, corresponde al extremo actor acreditar su dicho en los términos del artículo 167 del C.G.P.
* En ese orden de ideas, no se logra evidenciar en los anexos de la demanda, algún medio de prueba, ya sea sumario, que dé cuenta que los puntos de venta redujeren los corredores de circulación peatonal. Por lo cual de la veracidad de lo descrito en el presente apartado. De conformidad con el art. 167 del C.G.P., le asiste obligación a la activa de demostrar cada una de las afirmaciones

En cualquier caso, lo cierto es que de acuerdo a lo declarado en esta demanda, la señora Ligia Benjumea de Botero pudo observar la ocurrencia de la feria, lo que a todas luces evidencia que al ingresar al local comercial, la señora Benjumea de Botero pudo observar los pasillos para peatones y sus espacios, por lo que resulta claro que la caída se debió a un descuido de la propia demandante al no tener precaución al momento de caminar por el centro comercial.

**FRENTE AL HECHO “2”:** A mi procurada no le consta lo manifestado en el presente hecho, comoquiera que no presenció lo descrito, desconociendo plenamente las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Cabe resaltar que, si bien no hay prueba que permita evidenciar la supuesta caída sufrida por la señora Ligia Benjumea y los hechos que llevaron a este suceso, lo cierto es se evidencia que al centro comercial, la señora Ligia Benjumea pudo observar la feria que se estaba desarrollando, pues se aprecia que aquella está situada justo a la entrada de la propiedad horizontal, por lo que resulta claro que la caída se debió a un descuido de la propia demandante. Se resalta que, dentro de la epicrisis aportada con la demanda, se observa que la señora Benjumea de Botero tuvo una caída desde su propia altura, y no se describe una caída en algún lugar específico, como se observa:



Por lo anterior, resulta inferir que no es cierto que la señora Ligia Benjumea, se hubiera caído como consecuencia de lo estrecho que estaban los corredores, sino por su propio descuido. Situación que a todas luces se constituye en un eximente de responsabilidad pues cualquier perjuicio que de aquel hecho pudiera derivarse es imputable exclusivamente al hecho de la propia víctima.

En cualquier caso, no se puede ignorar que de acuerdo a lo manifestado por la misma parte, se establece que el hecho dañoso ocurrió en vista de que el señor Raúl Duran Díaz, quien se encontraba con una maleta, por un actuar imprudente, es quien empuja a la señora Ligia Benjumea de Botero y le ocasiona las supuestas lesiones que sufre posteriormente. Por lo tanto, desde ya se advierte que todo lo concerniente al evento ocurrido el 09 de julio de 2018 ocurrió por el hecho de un tercero, es decir, sin aceptar ningún tipo de responsabilidad en cabeza de los demandados y mucho menos de mi representada y sólo en gracia de discusión, se configura de manera evidente un eximente de responsabilidad.

**FRENTE AL HECHO “3”:** El presente hecho tiene varias afirmaciones, y me pronuncio a cada una de ellas así:

* A mi procurada no le consta que servicios médicos fueron los que atendieron a la señora Ligia Benjumea o cual fue el centro de atención al que se le dio traslado, pero se observa un certificado de atención por parte de EMI y epicrisis de la Clínica Farallones. En consecuencia, corresponde al extremo actor acreditar su dicho en los términos del artículo 167 del C.G.P.
* Frente a las lesiones que le provocó la caída a la señora Ligia Benjumea, no le consta a mi procurada, pues la misma no presenció lo ocurrido. Pese a ello, se logra evidenciar en la epicrisis aportada a la demanda, que el motivo de consulta es una “caída de su propia altura”, y no caída por una causa determinada, o en razón a espacios estrechos del centro comercial.

**FRENTE AL HECHO “4”:** A mi procurada no le consta de manera directa ninguna de las manifestaciones este hecho, comoquiera que corresponde a aspectos propios de la esfera íntima y personal de los actores. En consecuencia, corresponde al extremo actor acreditar su dicho en los términos del artículo 167 del C.G.P.

**FRENTE AL HECHO “5”:** A mi procurada no le consta la valoración presuntamente realizada a la señora Ligia Benjumea por parte del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cali, como quiera que Cosmocentro P.H., no tuvo intervención o injerencia alguna en la misma. En consecuencia, corresponde al extremo actor acreditar su dicho en los términos del artículo 167 del C.G.P.

**FRENTE AL HECHO “6”:** A mi procurada no le consta de manera directa el contenido del dictamen de calificación emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca, debido a que se trata de un documento emitido por un tercero, en el cual mi representada no tuvo intervención alguna.

**FRENTE AL HECHO “7”:** A mi procurada no le consta de manera directa ninguna de las manifestaciones este hecho, comoquiera que corresponde a aspectos propios de la esfera íntima y personal de los actores. En consecuencia, corresponde al extremo actor acreditar su dicho en los términos del artículo 167 del C.G.P.

**FRENTE AL HECHO “8”:** A mi procurada no le consta de manera directa ninguna de las manifestaciones este hecho, comoquiera que corresponde a aspectos propios de la esfera íntima y personal de los actores. En consecuencia, corresponde al extremo actor acreditar su dicho en los términos del artículo 167 del C.G.P.

**FRENTE AL HECHO “9”:** Es cierto.

**FRENTE AL HECHO “10”:** No existe hecho con esta denominación.

**FRENTE AL HECHO “11”: Es cierto,** de conformidad con poder adosado al plenario demandatorio los miembros del grupo familiar le otorgaron poder especial al abogado HERMES GREGORIO ARAUJO ESPAÑA para adelantar la presente demanda y ejercer la defensa de los intereses de la parte actora al interior del proceso de la referencia.

# FRENTE A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA:

**FRENTE A LA PRETENSIÓN “DECLARAR RESPONSABILIDAD”: ME OPONGO** a la prosperidad de esta pretensión comoquiera que no le asiste razón alguna a la parte demandante para al solicitar que se declare civilmente responsable a Cosmocentro Ciudadela Centro Comercial P.H., por los perjuicios, presuntamente ocasionados por la caída padecida el día 09 de julio del 2019 en las instalaciones del Centro Comercial. Lo anterior en la medida en que la pasiva no tuvo participación o injerencia en los hechos que se reprochan, y frente a ello resulta pertinente recordar que la responsabilidad civil implica la existencia de un hecho culposo, un daño y un nexo de causalidad entre ambos, circunstancia que no ha sido plenamente acreditada por la activa en el presente asunto, caracterizada por la orfandad probatoria, y por consiguiente la demandada no puede ser condenada en forma alguna como responsable por el accidente y cuando menos de los perjuicios derivados del mismo.

Además, en todo caso, es claro que no existe en el expediente prueba idónea que permita atribuir responsabilidad a la Cosmocentro Ciudadela Centro Comercial P.H., resaltando que la epicrisis aportada en la demanda señala que la señora Rodríguez Gómez tuvo una caída desde su propia altura, y adicionando lo declarado por la parte, en la que se establece que desde que ingresa al establecimiento comercial observa la feria que se estaba desarrollando, pues se aprecia que aquella está situada desde la entrada de la propiedad horizontal, llevándonos a exponer que el accidente se presentó por ausencia total de precaución por parte de la demandante, rompiendo así la responsabilidad que se pretende endilgar a la pasiva.

Por otro lado, es imprescindible tener en cuenta que, según lo manifestado por la misma parte, el hecho dañoso ocurrió debido a la conducta del señor Raúl Duran Díaz, quien, estando con una maleta, por un actuar imprudente, empujó a la señora Ligia Benjumea de Botero, ocasionándole las supuestas lesiones que sufrió posteriormente. Por lo tanto, desde ahora se advierte que todo lo relacionado con el evento del 09 de julio de 2018 se atribuye al comportamiento de un tercero, por lo que en el marco de este proceso, se evidencia claramente la configuración del eximente de responsabilidad denominado hecho de un tercero.

**FRENTE A LA PRETENSIÓN “1. DAÑOS PATRIMONIALES”: ME OPONGO** a la prosperidad de esta pretensión por carecer de fundamento fáctico y jurídico. Lo anterior, comoquiera que es una pretensión subsidiaria de la anterior que, por las razones ya expuestas, no tiene vocación de prosperidad.

**Frente a la Pretensión “a. Daño Emergente”: ME OPONGO** al reconocimiento y pago de la suma de $3.188.116, comoquiera que: (i) no se estructuró la responsabilidad civil de la pasiva y, por tanto, no nace su obligación indemnizatoria; (ii), La solicitud de pago por servicios domésticos carece de fundamento, ya que no se presenta una justificación válida para dicha exigencia, por lo demás no se especifica la fecha en la que se prestó dicho servicio, lo que dificulta su evaluación y; (iii) en todo caso, es manifiesto que esta pretensión se fundamenta en recibos los cuales fueron suscritos por terceros y no son oponibles a mi representada, siendo necesario desde ya advertir la necesidad de que se lleve a cabo la ratificación de los mismos por parte de quienes los suscriben.

**Frente a la Pretensión “b. Lucro Cesante”: ME OPONGO** al reconocimiento de este perjuicio en favor de la parte demandante, comoquiera que no obra al interior del expediente elementos que permitan dar cuenta de la existencia de responsabilidad en cabeza de la pasiva, y lo que es más existen pruebas que demuestran la configuración de eximentes de responsabilidad, de manera que no se puede asumir alguna obligación indemnizatoria derivada de estos hechos. Además, la pretensión es inviable pues no obra prueba idónea, pertinente y conducente de la actividad laboral o económica del demandante como tampoco del monto de sus ingresos, por lo que aquí se indica son meras especulaciones.

**FRENTE A LA PRETENSIÓN “2. DAÑOS EXTRA PATRIMONIALES”: ME OPONGO** a la prosperidad de esta pretensión por carecer de fundamento fáctico y jurídico. Lo anterior, comoquiera que es una pretensión subsidiaria de la anterior que, por las razones ya expuestas, no tiene vocación de prosperidad

**Frente a la Pretensión “2.1. Daños Morales”: ME OPONGO** de manera rotunda al reconocimiento y pago de las sumas pretendidas por concepto de perjuicios morales, comoquiera que, además de no estructurarse la responsabilidad civil de la pasiva, de todos modos, tal pretensión resulta abiertamente desproporcionada y contraría los parámetros jurisprudencialmente establecidos para tal fin.

Descendiendo al caso en concreto, vemos como los accionantes solicitan la suma de 30 SMLMV a favor de la señora Ligia Benjumea y 10 SMLMV para cada uno de los demás demandantes, para un total de 90 SMLMV o el equivalente a $70.311.780. No obstante, tal pretensión resulta completamente impróspera pues no se acredita ni justifica de manera alguna la valoración sobre la tasación de dicho rubro. Adicionalmente, se desconoce que para tal reconocimiento es requisito *sine qua non* que se haya acreditado fehacientemente todos y cada uno de los elementos de la responsabilidad civil contractual, situación que como ya se ha mencionado previamente, no se encuentra demostrada de forma alguna.

Se recalca que en casos de muerte la Corte Suprema de Justica ha reconocido como tope máximo la suma de $15.000.000 M/Cte, en los casos de una pérdida de capacidad laboral del 20,65%, con deformidades físicas permanentes que ocurren en razón de un accidente de tránsito. Siendo en todo caso preciso advertir que al interior del presente caso nos encontramos con solicitudes mucho mayores por parte de los demandantes, por lesiones mucho menores. De igual manera, debe referenciarse que frente al señor Alberto Hincapié Salazar, no existe presunción alguna frente al daño que pretende indemnizarse, pues es el yerno de la señora Benjumea de Botero, esto según los lineamientos sentados por la Corte Suprema de Justicia.

**Frente a la Pretensión “2.2. Daño a la Salud”: ME OPONGO** rotundamente al reconocimiento y pago de esta pretensión pues al no encontrarse estructurados los elementos de la responsabilidad civil extracontractual, es completamente inviable que opere la póliza de seguros. Ahora bien, respecto al daño a la salud es menester reseñar que si bien existen pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia en los que se han hecho mención a dicho perjuicio, lo cierto es que, a la fecha no existe un precedente que defina su concepto y reconocimiento como daño extrapatrimonial autónomo, máxime cuando hoy en día dentro de ese rango, se distinguen el daño moral, a la vida de relación y excepcionalmente la lesión a bienes jurídicos de especial protección constitucional o convencional. De manera que el perjuicio no puede ser reconocido en este asunto en los términos solicitados por el extremo actor.

Por ello, solicito respetuosamente al Despacho, despachar desfavorablemente esta pretensión.

**Frente a la Pretensión “2.3. Daño a la Vida de Relación”:** Me opongo a la prosperidad de esta pretensión por concepto de “daño a la vida en relación”,que se tasó por la suma equivalente a $70.311.780 o 90 SMLMV, discriminados en 30 SMLMV a favor de la señora Ligia Benjumea y 10 SMLMV para cada uno de los demás demandantes. Lo anterior toda vez que, además de que no se cumplen con los requisitos necesarios que permitan estructurar una responsabilidad como la pretendida, dicha pretensión resultaría totalmente impróspera porque: **(i)** la parte actora no acredita ni justifica de manera alguna la valoración sobre la tasación de dichas sumas de dinero, pues únicamente se limita solicitar un monto para cada demandante, sin que argumente y/o sustente lo allí pretendido; **(ii)** en este caso y frente a este tipo de pretensiones, como requisito necesario para su procedencia, se requiere que, previamente, se haya demostrado la producción y/o generación del daño dentro de los límites de esta esfera, a lo cual, conforme a la valoración probatoria que soporta esta pretensión, resulta carente de sustento en todo sentido, pues del acervo probatorio y la situación fáctica que se presenta en este caso, no es posible advertir si quiera la concreción de la responsabilidad civil que pretende imputar la parte demandante a la parte pasiva dentro del presente proceso; **(iii)** Se hace énfasis que, de cualquier manera, frente al yerno de la señora Ligia Benjumea no existe presunción alguna frente al daño que pretende indemnizarse, según los lineamientos sentados por la Corte Suprema de Justicia; **(iv)** Por lo demás, se recalca que la sumas pretendidas son abiertamente desproporcionada, y contraría los parámetros establecidos por la H. Corte Suprema de Justicia, dado que la mentada Corporación en Sentencia No. 21828 de 2017, resolvió el daño a la vida de relación en la suma equivalente a $30.000.000, con ocasión a lesiones que sufrió la víctima por la extracción de un ojo, situación que es evidentemente mucho más gravosa que la aquí presentada.

Corolario de lo anterior, no resulta aceptable que en el hecho que motivó la controversia y que resulta mucho menos gravoso para el demandante y por tanto es excesiva y desbordada.

**FRENTE A LA PRETENSIÓN “3”: ME OPONGO** a la prosperidad de esta pretensión en la medida en que no se encuentran elementos para declarar la responsabilidad a cargo de la parte demandante y sus pretensiones serán desestimadas será aquella quien debe ser condenada al pago de costas y agencias en derecho.

# OBJECIÓN JURAMENTO ESTIMATORIO:

De conformidad con lo establecido en el inciso primero del Art. 206 del CGPy con el fin mantener un equilibrio procesal, garantizar pedimentos razonables y salvaguardar el derecho de defensa de mi procurada, procedo a **OBJETAR** el Juramento Estimatorio de la Demanda. Lo mencionado, toda vez que se evidencia la ausencia de una liquidación razonada sobre el quantum del perjuicio reclamado, máxime cuando la tipología de perjuicio material debe acreditarse a partir de elementos que demuestren fidedignamente que existió un detrimento o merma en el patrimonio del reclamante, situación que no se prueba exclusivamente con aseveraciones del demandante.

Es preciso señalar que, en materia de indemnización de perjuicios, opera el principio de que el daño y su cuantía deben estar plenamente probados para proceder a su reconocimiento, toda vez que al juzgador le está relegada la posibilidad de presumir como cierto un perjuicio y más aún la magnitud del mismo. En efecto, con miras a la obtención de una indemnización, no basta alegar el supuesto detrimento, por cuanto el mismo no es susceptible de presunción, sino que es obligatorio acreditar debidamente su cuantificación.

De acuerdo con el Art. 206 del CGP, la parte demandante deberá indicar en el texto en el cual se hace el juramento estimatorio lo siguiente: 1. Que se afirma bajo la gravedad del juramento; 2. Que se trata de juramento estimatorio; 3. El valor de cada uno de los conceptos, rubros o partidas que componen la indemnización, frutos, mejoras o compensación, en este tipo de escenarios, incluir los conceptos por perjuicios materiales (daño emergente y lucro cesante); 4. El valor total y; 5. Las razones que se tuvo en cuenta para cada uno de los valores asignados, exponiéndolos con precisión, claridad y con fundamento en pruebas.

Me opongo a la solicitud de pago de daño emergente por el valor de $3.188.116, en virtud de la falta de sustento tanto factual como jurídico que respalde dicha pretensión. Esto pues el monto pretendido se fundamenta en recibos los cuales fueron suscritos por terceros y no son oponibles a mi representada, siendo necesario desde ya advertir la necesidad de que se lleve a cabo la ratificación de los mismos por parte de quienes los suscriben. Además, no existe prueba alguna que confirme que dichas sumas fueron realmente desembolsada.

En lo que respecta al lucro cesante, se recalca que no procede su reconocimiento, porque no obra al interior del expediente elementos que permitan dar cuenta de la existencia de responsabilidad en cabeza de la pasiva, y lo que es más existen pruebas que demuestran la configuración de eximentes de responsabilidad, de manera que no se puede asumir alguna obligación indemnizatoria derivada de estos hechos. Además, la pretensión es inviable pues no obra prueba idónea, pertinente y conducente de la actividad laboral o económica del demandante como tampoco del monto de sus ingresos, por lo que aquí se indica son meras especulaciones.

De igual manera, frente a este rubro me opongo, en la medida que no existe prueba dentro del plenario dé cuenta de que en efecto se haya pagado sumas alegadas, por lo cual resulta abiertamente improcedente estimar algún valor por un dinero que no ha salido del patrimonio del demandante.

Por las razones antes expuestas, me opongo enfáticamente al juramento estimatorio de la demanda.

# EXCEPCIONES DE MÉRTIO

## HECHO EXCLUSIVO DE LA VÍCTIMA

Del acervo probatorio que obra dentro del expediente, se colige que la responsabilidad única y exclusiva las lesiones producidas tras la caída del día 09 de julio del 2018 en mediaciones del Centro Comercial Cosmocentro, en la ciudad de Cali, son atribuidos a la señora Ligia Benjumea de Botero. Es importante señalar que el Centro Comercial cuenta con una extensa área para el tránsito peatonal, y que la caída de la demandante ocurrió dentro de las instalaciones del establecimiento comercial. Esto sugiere que la señora Benjumea, al ingresar, pudo haber notado la preparación del establecimiento comercial para la exposición de la feria artesanal, lo que implica que su caída fue resultado de su falta de precaución al caminar. Es especialmente relevante señalar que la señora Benjumea tenía todas las condiciones para evitar la caída, incluyendo buena visibilidad, condiciones climáticas favorables y conocimiento previo del lugar, por lo que la falta de cuidado por parte de la propia víctima no puede atribuirse al Centro Comercial Cosmocentro.

Recordemos que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha indicado que, se admite la intervención exclusiva de la víctima como causal de exoneración de responsabilidad, toda vez que, no se puede desconocer que la conducta bien sea positiva o negativa de la víctima pudo tener una incidencia relevante en el examen de responsabilidad civil, ya que su comportamiento podría corresponder a una condición o incluso a la producción misma del daño, así:

*(…) “****Cuando hablamos del hecho de la víctima, nos referimos a una causal que impide efectuar la imputación****, en el sentido en que, si bien es cierto, que puede ser que el demandado causó el daño física o materialmente,* ***el mismo no puede serle imputable en la medida en que el actuar de la víctima que le resultó extraño, imprevisible e irresistible, lo llevó a actuar de forma que causara el daño****, razón por la cual el mismo es imputable desde el punto de vista jurídico a la víctima y no al demandado”[[1]](#footnote-1)(…).*(negrillas propias)

En este caso específico, se logra advertir que el mismo comportamiento de la víctima ocasiona su propia caída, lo que consecuentemente le genera unas afectaciones, en tal sentido, su proceder es TOTALMENTE determinante para el resultado daño, lo que conlleva a desvirtúa correlativamente el nexo causal entre el daño y la presunta conducta culposa de la pasiva, al no señalizar una presunta rampa de acceso general a un establecimiento de comercio. Es así como consecuencia directa de ello, es la exoneración de la Centro Comercial Cosmocentro, dado que se confirma, a partir de las pruebas presentadas, que la señora Benjumea estaba al tanto de la feria que se llevaba a cabo y, por ende, debía actuar con diligencia y precaución en las instalaciones. Por lo tanto, se concluye que la caída ocurrió como resultado de la falta de atención y cuidado al no caminar con precaución.

Adicionalmente, no se puede pasar por alto que la señora Benjumea de Botero no presentaba dificultades físicas que le impidieras tener una marcha adecuada, acompañada de las condiciones de cuidado que cada persona debe tener al encontrarse en espacio abierto, lo cual le asiste la obligación de su propio cuidado. Así mismo, se resalta que la epicrisis parcial aportada expone que la caída de la demandante se presentó desde su propia altura, y no hay referencia o alusión a que la caída se haya producido por un factor externo endilgable a Cosmocentro.

En conclusión, se puede colegir que, al considerar todos los elementos probatorios en conjunto, resulta claro que el actuar de la señora Orga Rodríguez Gómez fue el único que causó la ocurrencia del hecho dañoso. Lo mencionado, pues concomitante con el acervo probatorio y la situación fáctica estudiada en este asunto, el proceder de éste reúne el requisito constitutivo de toda causa extraña, esto es, “*que se trate de un evento o acontecimiento exterior al círculo de actividad o de control de aquel a quien se le imputa la responsabilidad*”[[2]](#footnote-2), como causa determinante de la ocurrencia del accidente. Por este motivo, solicito al Despacho se sirva declarar probada esta excepción, al quedar demostrado conforme a las pruebas obrantes en el expediente, que el comportamiento desplegado por la demandante fue la causal exclusiva del hecho dañoso provocando la caída, y consecuentemente las lesiones padecidas.

## HECHO DE UN TERCERO, COMO CAUAL EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD.

Por medio de la presente, en consonancia con la excepción anterior, se pretende demostrar que, en el referido caso, se presentó un eximente de responsabilidad denominado hecho de un tercero, pues de cualquier manera el accidente del 09 de julio de 2018 se produjo única y exclusivamente por la impericia, negligencia, e imprudencia del señor Raúl Duran Díaz. Pues, de acuerdo a lo alegado en este proceso por el extremo actor, el señor Duran Díaz empuja a la señora Benjumea de Botero con una maleta, y le ocasiona las supuestas lesiones. Por ende, no podrá surgir obligación alguna a cargo de mi prohijada, pues se demuestra que el Centro Comercial Cosmocentro no solo actuó con total diligencia y cuidado, pues instauró todas las medidas para salvaguardar el bien de sus usuario, pero en razón a la impericia y el actuar imprudente del señor Durán Díaz la señora Benjumea sufrió lesiones

Recordemos entonces qué se tiene establecido normativa y jurisprudencialmente al respecto, con el fin de respaldar la presente excepción. En sentencia de la Corte Suprema de Justicia1, se analizó este concepto del hecho de un tercero y se explicaron de manera clara los requisitos para su operancia, así:

*“a) Debe tratarse antes que nada del hecho de una persona por cuyo obrar no sea responsable reflejo el agente presunto, vale decir que dicho obrar sea completamente externo a la esfera jurídica de este último;*

*b) También es requisito indispensable que el hecho fuente del perjuicio no haya podido ser previsto o evitado por el demandado, ya que si era evitable y no se tomaron, por imprudencia o descuido, las medidas convenientes para eliminar el riesgo de su ocurrencia, la imputabilidad a ese demandado es indiscutible, lo que en otros términos quiere significar que cuando alguien, por ejemplo, es convocado para que comparezca a juicio en estado de culpabilidad presunta por el ejercicio de una actividad peligrosa, y dentro de ese contexto logra acreditar que en la producción del daño tuvo injerencia causal un elemento extraño puesto de manifiesto en la conducta de un tercero, no hay exoneración posible mientras no suministre prueba concluyente de ausencia de culpa de su parte en el manejo de la actividad;*

*c) Por último, el hecho del tercero tiene que ser causa exclusiva del daño, aspecto obvio acerca del cual no es necesario recabar de nuevo sino para indicar, tan solo, que es únicamente cuando media este supuesto que corresponde poner por entero el resarcimiento a la cuenta del tercero y no del ofensor presunto, habida consideración que si por fuerza de los hechos la culpa de los dos ha de catalogarse como concurrente y por lo tanto, frente a la víctima, lo que en verdad hay son varios coautores que a ella les son extraños, esos coautores, por lo común, están obligados a cubrir la indemnización en concepto de deudores solidarios que por mandato de la ley lo son de la totalidad de su importe, postulado este consagrado por el artículo 2344 del Código Civil que, por sabido se tiene y así lo recuerda con acierto el recurrente en varios apartes de su demandada de casación, hace parte tal disposición de un sistema normativo que en sus lineamientos fundamentales la Corte tiene definido en los siguientes términos: "...Cuando hay de por medio varios responsables de un accidente, la obligación de resarcir los perjuicios es solidaria, lo que quiere decir que esos perjuicios se pueden reclamar de uno cualquiera de los responsables, según lo preceptúa el artículo 2344 del Código Civil en armonía con el 1571. El que realiza el pago se subroga en la acción contra el otro u otros responsables, según el artículo 1579 y siguiente (...). Siendo pues solidaria la responsabilidad, la parte demandante podía demandar el resarcimiento del daño contra todos los responsables o contra cualquiera de ellos ... (G.J. Ts. CLV primera parte, pág. 150 y CLXV, pág. 267, entre otras)".*

Por lo tanto, jurisprudencialmente se han establecido tres (3) requisitos inexorables para que se configure la exoneración de responsabilidad por el hecho de un tercero: 1. Que el obrar del tercero sea ajeno al comportamiento de quien causó el daño, 2. Que sea un hecho imprevisible e inevitable y 3. Que ese hecho sea el que efectivamente causó el daño.

Para el caso concreto es evidente que se configura a todas luces el eximente de responsabilidad denominado hecho de un tercero. Lo anterior por cuanto concurren los tres (3) requisitos antes vistos para que sea declarado así. En primer lugar, según lo manifestado por la parte demandante, se establece que las lesiones sufridas por la señora Benjumea ocurrieron cuando el señor Durán Díaz la empujó con su maleta, provocando su caída en el pasillo, configurándosele las lesiones por las cuales ahora demanda. Por lo tanto, resulta claro que las acciones de Raúl Duran Díaz son completamente independientes del comportamiento del Centro Comercial Cosmocentro. Es debido a su negligencia al circular con una maleta pesada y de considerable tamaño que ocurrieron estos lamentables acontecimientos.

En segundo lugar, mi prohijada no podía prever ni evitar que ocurriera dicha situación, pues al desplegar su actividad comercial, es esperable que los demás actores respeten los espacios públicos y cumplan con los parámetros mínimos de diligencia y cuidado, por lo cual se espera que ninguno de los usuarios cometan actuaciones imprudentes que puedan poner en riesgo a los demás sujetos.

Por último, es evidente que el actuar del señor Durán Díaz fue el causante del daño que hoy nos ocupa en este proceso, pues si no fuese por su actuar imprudente, la señora Ligia Benjumea de Botero no hubiese sufrido las lesiones por las cuales la cual se inicia este proceso.

Por lo tanto, desde ya se advierte que todo lo concerniente al accidente ocurrido el 09 de julio de 2018 ocurrió por el hecho de un tercero, es decir, sin aceptar ningún tipo de responsabilidad en cabeza de los demandados y sólo en gracia de discusión, se configura de manera evidente un eximente de responsabilidad.

Por todo lo anterior, ruego de declare probada esta excepción.

## INEXISTENCIA DE MEDIOS DE PRUEBA QUE PERMITAN ENDILGAR RESPONSABILIDAD CIVIL EN CABEZA DE COSMOCENTRO

Por medio de la presente excepción, se pretende demostrar al despacho que la parte activa del litigio fundamenta su escrito petitorio única y exclusivamente en el decir de la parte actora y una epicrisis parcial para intentar endilgar responsabilidad civil en cabeza de la pasiva. No obstante, no obran en el expediente más medios probatorios que den cuenta real y fidedigna de las circunstancias de modo en que ocurrieron los hechos del 09 de julio del 2018. Observándose una total orfandad de elementos que permitan corroborar lo que realmente ocurrió el día de los hechos. Por tal motivo, por la ausencia de medios probatorios que militen dentro del expediente de la referencia, las pretensiones de la demanda se deben desestimar.

Respecto de las pruebas aportadas en formato de video, la doctrina a expuesto que es *"aquel que consta en un dispositivo magnético y para su reconocimiento es necesaria la utilización de instrumento electrónico que lo lea o lo genere”*[[3]](#footnote-3)En ese orden de ideas, resulta necesario traer a consideración lo expuesto en el art. 2 literal A de la Ley 527 de 1999, el cual determina que:

*(…)* ***ARTÍCULO 2. Definiciones****. Para los efectos de la presente ley se entenderá por:*

*a) Mensaje de datos. La información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el Intercambio Electrónico de Datos (EDI), Internet, el correo electrónico, el telegrama, el télex o el telefax; (…)*

Con relación a lo anterior, es necesario traer a colación lo consignado en el art. 247 del C.G.P., que reza:

*(…)* ***Artículo 247. Valoración de mensajes de datos****: Serán valorados como mensajes de datos los documentos que hayan sido aportados en el mismo formato en que fueron generados, enviados, o recibidos, o en algún otro formato que lo reproduzca con exactitud.*

*La simple impresión en papel de un mensaje de datos será valorada de conformidad con las reglas generales de los documentos. (…)* (Subrayado propio)

De lo anterior, resulta importante decir que, el concepto de mensaje de datos, expone una variabilidad de transferir información, y con relación a las grabaciones de audio y video, resulta necesario decir que los mismos son tomados como medios que permiten transmitir una información, y dentro del ámbito jurídico se toman como medio de prueba, que han cobra importancia debido a su uso frecuente. Pese a ello, resulta necesario resaltar que existe una definición para la *“prueba electrónica”[[4]](#footnote-4),* la cual expone que *“es aquella prueba que se encuentra* ***en un aparato que requiere electricidad para su funcionamiento****, a través del cual se manifiesta una declaración de voluntad de un sujeto de derecho o se representa una idea del pensamiento, que goza de equivalencia funcional,* ***ha sido controvertida en juicio y puede ser valorada por un juez****”[[5]](#footnote-5).* En ese orden de ideas, resulta necesario exponer, que la valoración de la prueba, debe surtir una serie de etapas, que permitan realizar un examen de legalidad, hasta convertirse en una prueba sumaria, que finalmente sirva al final para controvertir los argumentos de un litigio.

Frente a lo expuesto anteriormente, resulta necesario traer a consideración el postulado jurisprudencial de la Corte Constitución, respecto de la validez de la prueba, en sentencia C-067 del 2003, la cual expone:

*“(…) Una propiedad que generalmente se atribuye a los aportes documentales, testimoniales u otros elementos de juicio que serán apreciados y valorados en un juzgado para dirimir sobre hechos controversiales;* ***pero para saber cuándo esa cualidad se encuentra presente, es necesario hacer referencia a la legalidad y a la licitud de la misma, aspectos que actúan como filtros en defensa del bloque de constitucionalidad*** *(…)”* (negrillas y subrayado fuera del texto original)

En ese orden de ideas, es necesario considerar que la validez de la prueba, depende mucho de su *integralidad, rastreabilidad, recuperabilidad y conservación[[6]](#footnote-6)*, con la finalidad de conservar el contenido del mismo, la permanencia y la fuente original de la información.

Una vez hecho el recuento normativo y doctrinal al respecto, se analizará el caso particular. Dentro de los medios de prueba que se aportan al proceso obra las declaraciones realizadas por la señora Benjumea de lo sucedido en esa fecha. Esta simple cuestión es determinante para aseverar que dentro del proceso no existe prueba siquiera sumaria que permita verificar la consecución de hechos alegados por la actora. De tal manera, es manifiesto que se pretende endilgar una responsabilidad por parte de mi prohijada, sin que dentro del proceso exista prueba del contexto en el cual se presentó el accidente del 09 de julio del 2018, o si siquiera tal evento realmente ocurrió. Se resalta que ni siquiera obra prueba fotográfica de la presunta feria artesanal que se estaba celebrando, o de la estreches de los pasillos en este día, la cual es principalmente la situación de controversia del presente litigio.

En este punto, resulta importante destacar que como bien se ha señalado la validez de la prueba requiere que la misma pase por unas etapas, adicionando que la misma debe venir de fuentes creíbles y verificables, situación que no ocurre en este caso, pues no obran pruebas de la ocurrencia del suceso demandado.

En consecuencia, debido a que correspondía al demandante probar los fundamentos de sus pedimentos, en específico, demostrar la causa efectiva del evento de 09 de julio del 2018 y en vista de la ausencia probatoria que milita en el libelo genitor, de manera consecuente deberán ser negadas todas y cada una de las pretensiones incoadas en la demanda.

Lo anterior implica que es DEBER de la parte demandante acreditar suficientemente el hecho culposo que pretende atribuir a la demandada Colanta, pues no basta con la mera afirmación de que la persona jurídica es responsable porque determinado hecho ocurrió ahí y mucho menos en eventos como caídas, resbalones o cualquier otro accidente como el que aquí se estudia, en donde existe que el actuar de la víctima es el causante del hecho. Sobre este particular y la imperiosa necesidad de acreditar la caída o resbalón en los lugares donde funcionan los establecimientos de comercio, al respecto se traer un pronunciamiento internacional, que se toma como base, y expone lo siguiente:

*“(…) En cualquier caso, si el accidente ocurre y este causa un daño, surgirá, ciertamente, la responsabilidad de las personas que tenían la obligación de proporcionar a los usuarios del supermercado las debidas condiciones de seguridad,* ***acreditando el demandante la omisión de diligencia exigible por parte de los responsables*** *del establecimiento cuyo empleo hubiese evitado el daño, acorde con las circunstancias de las personas, tiempo y lugar, según previene el art. 1104 del Código Civil,* ***teniendo en cuenta que el hecho de regentar un negocio abierto al público, no puede considerarse en sí mismo una actividad creadora de riesgo****, tanto dentro como fuera del mismo, y que, aunque así fuera,* ***la jurisprudencia no ha llegado al extremo de erigir el riesgo como criterio de responsabilidad*** *con fundamento en el art. 1902 del Cc (SSTS 11 de septiembre de 2006; 22 de febrero 2007), como tampoco acepta una supuesta objetivación de la responsabilidad civil que no se adecua a los principios que informan su regulación positiva ni la inversión de la carga de la prueba, limitada en la actualidad a supuestos legalmente tasados (art. 217.6 LEC), y que en realidad envuelve una aplicación del principio de la proximidad o facilidad probatoria o una inducción basada en la evidencia, más que en supuestos de riesgos extraordinarios, daño desproporcionado o falta de colaboración del causante del daño, cuando está especialmente obligado a facilitar la explicación del daño por sus circunstancias profesionales o de otra índole (STS de 2 marzo de 2006).”*[[7]](#footnote-7)(negrillas y subrayado propios)

Coloraría con lo anterior, resulta necesario exponer que el demandante debe probar la omisión exigible a los presuntos responsables, a quien se pretende endilgar la responsabilidad de un daño.

De lo expuesto es claro para las partes que, no le asiste ninguna obligación resarcitoria a la pasiva, por cuanto que el elemento del daño no está debidamente respaldado en este caso, y en virtud de dicha carencia demostrativa no es posible que el Juzgador haga exigible en contra de las demandadas el resarcimiento pretendido por el extremo actor. Es preciso recordar que la H. Corte Suprema de Justicia señaló en Sentencia del 18 de diciembre de 2008, que el daño como un elemento estructural de la responsabilidad civil, debe ser acreditado de manera indelegable por quien manifiesta su causación, según la H. Corte se debe tener en consideración lo siguiente:

*“(…)****su plena demostración recae en quien demanda****, salvo las excepciones legal o convencionalmente establecidas, lo que traduce que, por regla general, el actor en asuntos de tal linaje, está obligado a acreditarlo, cualquiera sea su modalidad, de donde, en el supuesto señalado, era -y es- imperioso probar que el establecimiento producía utilidades, o estaba diseñado para producirlas en un determinado lapso de tiempo, sin que este último caso, pueda confundirse con el daño meramente eventual o hipotético, que desde ningún punto de vista es admisible (…)[[8]](#footnote-8)* (negrillas propias)

Teniendo en cuenta lo expresado por la H. Corte en esta sentencia, si no hay daño no puede hablarse de responsabilidad civil extracontractual, además se reitera, cuando se demanda por responsabilidad civil, se debe demostrar el daño que fue presuntamente causado, identificando claramente para los efectos, cómo es la accionada generó o produjo dicho daño; en ese tenor, se hace mandatorio que incorporen los medios de prueba legalmente permitidos, para demostrarle al censor la certeza que compone de su dicho y, por supuesto, la veracidad del daño irrogado, lo cual no ocurrió en este asunto.

En conclusión, resulta evidente entonces que la parte demandante pretende soportar sus pretensiones con su mero decir, lo cual, como se dijo antes, no es prueba idónea, pertinente y conducente, pues es el mero decir de la parte demantne, lo cual no constituye una prueba.  Así, se resalta que no existe prueba de la existencia de la mentada feria artesanal que se estaba celebrando o de la estreches de los pasillos en este día, que son las presuntas razones por las cuales se genera la supuesta caída de la señora Ligia Benjumea. Por lo que, se observa que no hay material probatorio que contenga información y el contexto general de los hechos que hoy son debate Finalmente, la consecuencia necesaria frente a esta ausencia y orfandad de medios de prueba que permitan esclarecer la causa efectiva de los hechos plurimencionados, implica correlativamente que se deban negar las pretensiones de la demanda.

Por lo expuesto solicito se declare probada esta excepción.

## REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN COMO CONSECUENCIA DE LA INCIDENCIA DE LA VÍCTIMA EN LA PRODUCCIÓN DEL DAÑO

Esta excepción se propone sin perjuicio de las anteriores y sin que ello implique aceptación de responsabilidad de ninguna índole en contra de mi representada. Lo anterior, toda vez que, de no acogerse lo planteado en la excepción precedente, resulta necesario señalar que, en todo caso, el comportamiento desplegado por la señora Ligia Benjumea, al encontrar establecida la culpa de la víctima como causa eficiente de su propio menoscabo, se infiere que, ese comportamiento amplió la esfera de riesgo, contribuyendo de manera adecuada y necesaria a la producción del daño. Situación que genera un atenuante al deber de reparación.

A partir de la jurisprudencia de las altas Cortes, para el análisis de este tipo de eventos en los que puede llegar a probarse la injerencia de la propia víctima en el resultado lesivo, corresponderá al Juez examinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se produjo el supuesto daño. Esto, con el fin de evaluar la equivalencia o asimetría de la conducta de la víctima en la incidencia en la cadena de la causa generadora del daño, estableciendo de ese modo, el grado de responsabilidad que corresponde a cada uno de los involucrados, de conformidad con lo establecido en el artículo 2357 del Código Civil, cuyo tenor literal es el siguiente:

*“ARTÍCULO 2357. REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN****. La apreciación del daño está sujeta a reducción, si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente****.” (Subrayado y negrillas fuera del texto original)*

Ahora bien, es fundamental establecer la circunstancia incidental que corresponde en este caso. Ante ello, la Corte Suprema de Justicia ha expuesto la valoración que se debe tener, frente al comportamiento de la propia víctima, señalado lo siguiente:

*Cuando hablamos del hecho de la víctima, nos referimos a una causal que impide efectuar la imputación, en el sentido en que, si bien es cierto, que puede ser que el demandado causó el daño física o materialmente, el mismo no puede serle imputable en la medida en que el actuar de la víctima que le resultó extraño, imprevisible e irresistible, lo llevó a actuar de forma que causara el daño, razón por la cual el mismo es imputable desde el punto de vista jurídico a la víctima y no al demandado.”[[9]](#footnote-9)*

Por lo expuesto impone al juzgador el deber de examinar a plenitud la conducta desplegada por la víctima, para precisar la incidencia en el daño y consecuentemente, determinar la responsabilidad de la misma.

Así entonces, cuando la causa del daño corresponde a una acción u omisión de la misma víctima, habría un único responsable. Frente a este aspecto, se reitera que el comportamiento de la señora Ligia Benjumea al no acatar su obligación de cuidado y precaución al momento de caminar, fue la que le causo su propio menoscabo. Por ello, la consecuencia que se deriva es que se atenúe el deber a reparar, o la responsabilidad a asumir. Frente a este punto, cabe señalar que el grado de interrelación jurídica entre las causas que dieron origen al daño y sus consecuencias, deben ser analizadas por el Despacho de manera tal que constituya un atenuante al deber de reparación que endilga la parte actora como exclusiva del demandado.

Por lo anteriormente expuesto, solicito al Despacho se sirva declarar probada la presente excepción, al determinarse que la señora Benjumea de Botero al no poner cuidado y atención al ejercer su propia marcha (caminar), pese a que se encontraba observando el lugar de los hechos para verificar quienes se encontraban mirando los diferentes stands de la feria, logrando apreciar los elemento y estructuras que se encontraban frente de ella, se cae desde su propia altura, contribuyendo efectivamente a la generación de su propio daño.

## TASACIÓN INDEBIDA E INJUSTIFICADA DE LOS SUPUESTOS PERJUICIOS MORALES INVOCADOS EN LA DEMANDA

Sin perjuicio de reiterar que en el sub lite no existe responsabilidad alguna en cabeza de los demandados, es importante precisar que de todas maneras es evidente la indebida tasación que hace la apoderada de la parte actora para establecer el monto del daño moral solicitado, pues con base en los lineamientos que han señalado la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, estos en ningún caso alcanzarían a obtener la cantidad reclamada por la parte activa. Al respecto, es importante mencionar que, de endilgarse algún tipo de responsabilidad a los demandados, es necesario que el señor Juez en virtud de su arbitrum judicis, valore específicamente los hechos y pruebas contenidas en este expediente para tasar lo relacionado a esta modalidad de perjuicio. Sin embargo, es claro que para el caso que nos asiste no se demostró fehacientemente su causación en los rubros enrostrados en la demanda, pues no existe documento técnico que demuestre la gravedad de la lesión o si quiera el dictamen de pérdida de capacidad laboral, que permita sustentar la aludida tasación

La Corte ha reseñado que este tipo de perjuicio “*no constituye un «regalo u obsequio»*,” por el contrario se encuentra encaminado a “*reparar la congoja, impacto directo en el estado anímico espiritual y en la estabilidad emocional de la persona que sufrió la lesión y de sus familiares*”[[10]](#footnote-10), con sujeción a los elementos de convicción y las particularidades de la situación litigiosa, sin perjuicio de los criterios orientadores de la jurisprudencia, en procura de una verdadera, justa, recta y eficiente impartición de justicia[[11]](#footnote-11).

Resulta igualmente pertinente recordar que respecto a la ponderación de los daños morales, si bien la misma se encuentra deferida “al arbitrium judicis”, es decir, al recto criterio del fallador, estos daños deben ser debidamente acreditados, demostrados y tasados por quien las pretende y, para este caso en particular, los valores solicitados como indemnización por concepto de perjuicios morales, exceden los valores tasados y adjudicados por la Corte Suprema de Justicia en distintos pronunciamientos. Relacionamos, así, algunos fallos de la Sala de Casación Civil en los que emite condenas por concepto de “daño moral” para sustentar este argumento[[12]](#footnote-12).

Así, por ejemplo, dicha Corporación[[13]](#footnote-13) se pronunció sobre un caso en el que la parte demandante se le amputo el miembro inferior izquierdo como consecuencia de culpa médica. Al respecto, la tasación fijada por el juez de segunda instancia (y la cual quedó en firme) respecto a la indemnización de perjuicios morales fue de $15.000.000,oo.

En otro caso, la Corte[[14]](#footnote-14) reconoció el monto de $15.000.000,oo a los padres y hermanos de victima que sufrió perturbación psíquica, deformidad física permanente y pérdida de capacidad laboral de 20.65%

Así, se tiene que los montos, tales como se encuentran tasados dentro de la demanda, no se encuentran fundamentados en bases normativas y/o jurisprudenciales. Es más, con su simple lectura es claro que lo que busca el extremo actor es enriquecerse con los mismos.

En conclusión, en este caso específico, conforme a las pruebas obrantes en el expediente, es claro como el extremo actor no solo no probó la configuración del presunto perjuicio moral del cual pretende su indemnización, sino que adicionalmente, sus estimaciones económicas son abiertamente indebidas e injustificadas de conformidad con los parámetros jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia. Solicito declarar probada esta excepción y desestimar la cuantificación de perjuicios presentada por la parte demandante.

Por todo lo anterior solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

## TASACIÓN INDEBIDA DE LOS PERJUICIOS DE DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN INVOCADOS EN LA DEMANDA

Sea lo primero indicar que el daño a la vida de relación se presenta cuando la víctima sufre una alteración psicofísica que le impide o dificulta gozar de actividades rutinarias o bienes de la vida que disfrutaba antes del hecho lesivo. Así, este perjuicio se ve reflejado en el deterioro de la calidad de vida de la víctima y la pérdida de la posibilidad de tener contacto con las demás personas o relacionarse con ellas. En otras palabras, es improcedente el reconocimiento del daño a la vida de relación, teniendo en cuenta que en este caso no se encuentran acreditados los requisitos para su solicitud. En efecto, el reconocimiento del daño a la vida en relación, se da única y exclusivamente cuando son comprobables las alteraciones en la esfera externa del individuo sin que en ninguna medida puedan presumirse. Por lo cual, resulta totalmente improcedente el reconocimiento de este rubro porque la parte demandante no ha cumplido la carga probatoria frente a este tópico, pero en todo caso la suma pretendida es abiertamente arbitraria y desproporcional de cara a los fundamentos facticos de la demanda.

Es precioso, que, con base en lo anterior, traigamos a consideración el postulado de la H. Corte Suprema de Justicia en la Sentencia del 29 de marzo de 2017, en la que se indicó lo siguiente:

*“(…) b) Daño a la vida de relación****:*** *Este rubro se concede únicamente a la víctima directa del menoscabo a la integridad como medida de compensación por la pérdida del bien superior a la salud,* ***que le impedirá tener una vida de relación en condiciones normales*** *(…)” (Subrayado y negrilla fuera del texto original)*

Por la postura expuesta, se cree necesario considerar que la parte demandante, pretende el reconocimiento de una indemnización que en realidad no sería procedente, por cuanto el daño a la vida en relación se desprende de la existencia de lesiones debidamente acreditadas, con secuelas permanentes y pese a ello, en todo caso, el reconocimiento invocado es superior a los casos de similitudes circunstancias de que nos ocupa, que en diferentes postulados la H. Corte Suprema ha reconocido.

Pues bajo la comprensión que se desprende de la lectura del escrito genitor, se evidencia una desmesurada solicitud de perjuicios por concepto de daño a la salud en relación por la suma de 90 SMLMV a favor de la parte actora. Claramente, es evidente el ánimo especulativo de la errónea tasación del daño pretendido, De todas maneras, la cuantificación que por este concepto solicita la parte demandante es exorbitante pues, como veremos más adelante, desatiende los baremos jurisprudenciales que, sobre el daño a la vida de relación, se ha referido la Corte Suprema de Justicia.

En la actualidad, como es bien sabido, el daño a la vida de relación pretende reparar el mismo perjuicio sufrido en la órbita física y psicológica de la víctima que le impide realizar aquellas actividades agradables a la existencia, sin que este tipo de perjuicio tenga por vocación reconocerse en todos los casos. En efecto, pues hoy el mismo se ha admitido excepcionalmente cuando se trata de lesiones graves, que afecten la órbita de desenvolvimiento del lesionado y sólo para ser indemnizado a la víctima directa, por estar asociado estrictamente con lesiones físicas o anatómicas. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, ha delimitado el concepto de daño a la vida de relación y lo diferencia del daño moral, así:

*“(…) Como se observa, a diferencia del daño moral, que corresponde a la órbita subjetiva, íntima o interna del individuo, el daño a la vida de relación constituye una afectación a la esfera exterior de la persona, que puede verse alterada en mayor o menor grado a causa de una lesión inflingida (sic) a los bienes de la personalidad o a otro tipo de intereses jurídicos, en desmedro de lo que la Corte en su momento denominó “actividad social no patrimonial”.*

*Dicho con otras palabras, esta especie de perjuicio puede evidenciarse en la disminución o deterioro de la calidad de vida de la víctima, en la pérdida o dificultad de establecer contacto o relacionarse con las personas y cosas, en orden a disfrutar de una existencia corriente, como también en la privación que padece el afectado para desplegar las más elementales conductas que en forma cotidiana o habitual marcan su realidad. Podría decirse que quien sufre un daño a la vida de relación se ve forzado a llevar una existencia en condiciones más complicadas o exigentes que los demás, comoquiera que debe enfrentar circunstancias y barreras anormales, a causa de las cuales hasta lo más simple se puede tornar difícil. Por lo mismo, recalca la Corte, la calidad de vida se ve reducida, a paso que las posibilidades, opciones, proyectos y aspiraciones desaparecen definitivamente o su nivel de dificultad aumenta considerablemente. Es así como de un momento a otro la víctima encontrará injustificadamente en su camino obstáculos, preocupaciones y vicisitudes que antes no tenía, lo que cierra o entorpece su acceso a la cultura, al placer, a la comunicación, al entretenimiento, a la ciencia, al desarrollo y, en fin, a todo lo que supone una existencia normal, con las correlativas insatisfacciones, frustraciones y profundo malestar (…)”[[15]](#footnote-15).*

Para conocer a mayor profundidad lo que ha establecido la Corte Suprema de Justicia en algunos casos en los que excepcionalmente se reconoció este concepto indemnizatorio, es preciso señalar que la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia ordenó el pago de $ 30.000.000 a la víctima directa **por los perjuicios ocasionados por la extracción de su ojo izquierdo**. Obsérvese que, en aquel vento, la víctima quedó con secuelas para toda la vida y que afectaron directamente su interacción con el mundo exterior. Las secuelas fueron de tal magnitud, que era de esperarse que su actitud y su forma de ser cambiaran abruptamente tras los hechos que motivaron la demanda. En el caso particular que nos cita al presente proceso, afortunadamente no se vislumbra que la señora Ligia Benjumea haya tenido consecuencias permanentes en su corporeidad que afectaron directamente su estilo de vida, su relación con los demás o consigo misma, pero pese a ello realiza una desmesurada solicitud indemnizatoria que supera con creces el rubro reconocido en casos de secuelas de gran envergadura a favor de la señora Benjumea, y es más del 10% que busca que se le reconozca a cada uno de los demás demandantes.

Es indispensable reiterar que el caso particular se trata de lesiones de menor gravedad donde la pérdida de capacidad laboral (PCL), es muchísimo menor a aquella que se genera por la pérdida de un ojo, y adicionalmente la epicrisis aportada expone que la lesión padecida por la señora demandante fue por una caída desde su propia altura. Además, tampoco se ha probado una afectación psicológica permanente a través de dictamen psicológico o de diagnóstico. Por lo anterior, se concluye que la parte actora está solicitando una suma de dinero abiertamente improcedente por cuanto no se observa ningún detrimento de tipo personal que le afecte, tampoco una secuela que haya impedido continuar con su vida de forma normal o con regularidad a la que llevaban antes de los hechos que nos citan al proceso. Por lo tanto, la pretensión por este concepto no se encuentra probada, es desbordada y no se ajusta a los criterios que sobre este tipo de perjuicio ha establecido la jurisprudencia, no siendo procedente su reconocimiento, para lo cual nos remitimos a la argumentación expuesta en el literal anterior.

Por lo anteriormente mencionado, en este caso específico, conforme a las pruebas obrantes en el expediente, así como los pronunciamientos y manifestaciones realizadas por los sujetos intervinientes en cada uno de sus escritos, no pueden ni deben ser indemnizados por mi representada, ya que, su presunta causación no se encuentra debidamente probada en ninguna de las modalidades por perjuicio extrapatrimonial, además de que resultan abiertamente indebidas e injustificadas a la luz de los presupuestos configurativos que permiten estructurar el origen de este tipo de perjuicios, y que en todo caso, solo pueden ser reconocidos a la víctima directa, por lo que la solicitud de la reparación de este daño por los otros demandantes es a todas luces improcedente.

Por todo lo anterior, solicito declarar probada esta excepción.

## IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO DE PERJUICIO POR CONCEPTO DE DAÑO A LA SALUD.

Frente a esta tipología de perjuicio pretendida por la parte actora, es necesario señalar que el daño a la salud no corresponde a una tipología de perjuicios reconocida por la Corte Suprema de Justicia por lo que no habría lugar a su reconocimiento. Asimismo, se debe tener presente que este perjuicio que busca indemnizarse, tiene como propósito resarcir el mismo concepto que el daño a la vida en relación. Por lo tanto, acceder a estas pretensiones significaría un doble reconocimiento del mismo perjuicio, lo que conllevaría a un enriquecimiento sin justa causa en detrimento del patrimonio de la parte accionada.

Al respecto se puede observar que la H. Corte Suprema de Justicia ha indicado lo siguiente:

*“Tiene dicho la jurisprudencia de esta Corte que los daños extrapatrimoniales no se circunscriben al daño moral, pues dentro del conjunto de bienes no pecuniarios que pueden resultar afectados mediante una conducta antijurídica se encuentran comprendidos intereses distintos a la aflicción, el dolor o la tristeza que un hecho dañoso produce en las víctimas.*

*En ese orden,* ***son especies de perjuicio no patrimonial, además del moral, el daño a la vida de relación y la lesión a bienes jurídicos de especial protección constitucional o convencional”[[16]](#footnote-16).*** (negrilla y subrayado fuera del texto original).

Siendo preciso advertir que el derecho a la salud, no hace parte de aquellos bienes jurídicos de especial protección constitucional o convencional, pues, en Sentencia SC10297-2014 del 05 de agosto de 2014 la Corte Suprema de Justicia con ponencia del Magistrado Ariel Salazar Ramírez reconoció que los bienes jurídicos de especial protección constitucional son la libertad, la dignidad, la honra y el buen nombre. Es decir, que esta tipología de perjuicios se encuentra deferidas al ámbito de los derechos personalísimos, así lo expreso la corte en tal fallo al señalar que:

*En este contexto, son especies de perjuicio no patrimonial –además del daño moral– el daño a la salud, a la vida de relación, o a bienes jurídicos de especial protección constitucional tales como la libertad, la dignidad, la honra y el buen nombre, que tienen el rango de derechos humanos fundamentales.*

*Así fue reconocido por esta Sala en providencia reciente, en la que se dijo que ostentan naturaleza no patrimonial: “…la vida de relación, la integridad sicosomática, los bienes de la personalidad –verbi gratia, integridad física o mental, libertad, nombre, dignidad, intimidad, honor, imagen, reputación, fama, etc.–, o a la esfera sentimental y afectiva…” (Sentencia de casación de 18 de septiembre de 2009) [Se subraya]*

Por tanto, en tratándose de tipologías de perjuicios que no han sido reconocidas por la Corte Suprema de Justicia, las mismas están llamadas a su fracaso, máxime cuando quiera que estas tipologías de perjuicio comportarían la modalidad de perjuicio que aquella por concepto de daño a la vida en relación, por lo que, dicho de otro modo, el extremo actor pretende el reconocimiento en tres oportunidades de una misma tipología de perjuicios.

## IMPROCEDENCIA DE RECONOCIMIENTO DE LUCRO CESANTE QUE PRETENDE LA SEÑORA LIGIA BENJUMEA DE BOTERO.

Mediante la presente excepción se demostrará al despacho que la demandante Ligia Benjumea no se le puede reconocer ninguno de los conceptos indemnizatorios materiales que solicita en la demanda. Lo anterior, toda vez que: **(i)** no ha podido establecer que la causa de las lesiones de la señora demandante sea por la ausencia de marcación en la presunta rampa, objeto de discusión; **(ii)** En el expediente no hay ningún medio de prueba que corrobore, fehacientemente que la señora Benjumea de Botero efectivamente hubiera perdido alguna vinculación laboral con ocasión a los hechos objetos que se reprocha, reiterando que no se ha demostrado las secuelas de las presuntas lesiones. **(iii)** se evidencia que dentro del proceso no obra prueba idónea, pertinente y conducente de la actividad laboral o económica del demandante como tampoco del monto de sus ingresos, por lo que aquí se indica son meras especulaciones.

Es pertinente manifestar que el lucro cesante ha sido entendido como una categoría de los perjuicios materiales de naturaleza económica y de contenido pecuniario. Es decir, que puede cuantificarse en una suma de dinero y que consiste en la afectación o menoscabo de un derecho material o patrimonial, reflejado en la ganancia o ingreso que se ha dejado de percibir y que no ingresará al patrimonio de la persona. En otras palabras, se deja de recibir cuando se sufre un daño y puede ser percibido a título de indemnización por las víctimas directas o indirectas cuando se imputa al causante del perjuicio la obligación de reparar.

No obstante, para indemnizar un daño, además de su existencia cierta, actual o futura, es necesaria su plena demostración en el proceso con elementos probatorios fidedignos e idóneos, como lo son aquellos medios permitidos en el ordenamiento jurídico. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha sostenido lo siguiente:

*“(…) en cuanto perjuicio, el lucro cesante debe ser cierto, es decir, que supone una existencia real, tangible, no meramente hipotética o eventual. (…)* ***Vale decir que el lucro cesante ha de ser indemnizado cuando se afinca en una situación real, existente al momento del evento dañoso, condiciones estas que, justamente, permiten inferir, razonablemente, que las ganancias o ventajas que se percibían o se aspiraba razonablemente a captar dejarán de ingresar al patrimonio fatal o muy probablemente*** *(…) Por último están todos aquellos “sueños de ganancia”, como suele calificarlos la doctrina especializada, que no son más que conjeturas o eventuales perjuicios que tienen como apoyatura meras hipótesis, sin anclaje en la realidad que rodea, la causación del daño, los cuales, por obvias razones, no son indemnizables (…)”[[17]](#footnote-17) (Subrayado y negrilla fuera del texto original).*

Así, resulta evidente que para reconocer la indemnización del lucro cesante es necesario, de un lado, estar en presencia de una alta probabilidad de que la ganancia esperada iba a obtenerse y de otro, que sea susceptible de evaluarse concretamente. Sin que ninguna de esas deducciones pueda estar soportada en simples suposiciones o conjeturas, porque de ser así, se estaría en frente de una utilidad meramente hipotética o eventual. De manera que el lucro cesante solo reconocerá cuando obren pruebas suficientes que acrediten que efectivamente la víctima dejó de percibir los ingresos o perdió una posibilidad cierta de percibirlos. En reciente pronunciamiento la Corte Suprema de Justicia manifestó literalmente lo siguiente:

*“(…) Esta tipología de daño patrimonial corresponde a la ganancia esperada, de la que se ve privada la víctima como consecuencia del hecho dañoso padecido; desde luego,* ***a condición de que no sea sólo hipotética, sino cierta y determinada o determinable****, y se integra por «todas las ganancias ciertas que han dejado de percibirse o que se recibirían luego, con el mismo fundamento de hecho», según lo explicó esta Corporación en CSJ SC, 28 jun. 2000, rad. 5348, reiterada en CSJ SC16690-2016, 17 nov (…)”*

Por el mismo sendero, en sentencia CSJ SC11575-2015, 31 ago., la Sala enfatizó que la reparación del lucro cesante

*“(...)* ***resulta viable en cuanto el expediente registre prueba concluyente y demostrativa de la verdadera entidad y extensión cuantitativa del mismo.*** *En caso contrario, se impone rechazar por principio conclusiones dudosas o contingentes acerca de las ganancias que se dejaron de obtener apoyadas tales conclusiones en simples esperanzas, expresadas estas en ilusorios cálculos que no pasan de ser especulación teórica, y no en probabilidades objetivas demostradas con el rigor debido (…)”[[18]](#footnote-18) (Subrayado y negrilla fuera del texto original)*

En este orden de ideas, es claro que en ningún caso procede el reconocimiento solicitado por la parte demandante, toda vez que los supuestos perjuicios en los que se fundamentan las pretensiones de la demanda fueron calculados, estimados o valorados de forma plenamente especulativa. De modo que, siguiendo los derroteros jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia, ante la ausencia de certeza del lucro, es decir, la existencia real, tangible y no meramente hipotética o eventual, es improcedente el reconocimiento de indemnización por esta tipología de perjuicios. En tal virtud, ante la ausencia de prueba del lucro, claramente deberá denegarse totalmente esta pretensión incluida en la demanda

Lo anterior significa que el lucro cesante no puede construirse sobre conceptos hipotéticos, pretensiones fantasiosas especulativas que se fundan en posibilidades inciertas de ganancias ficticias. Por el contrario, debe existir una cierta probabilidad objetiva que resulte del curso normal de las cosas y de las circunstancias especiales del caso. De manera que el mecanismo para cuantificar el lucro cesante consiste en un cálculo sobre lo que hubiera ocurrido de no existir el evento dañoso. Siempre que logre acreditarse que en efecto la víctima, al momento de la ocurrencia del daño, ejerciera alguna actividad productiva que le generara los ingresos dejados de percibir.

Así pues, no resulta procedente la pretensión impetrada según la cual debe reconocerse y pagarse en favor del Demandante, sumas de dinero por concepto de lucro cesante consolidado. Toda vez que no hay prueba dentro del expediente de la actividad productiva alguna que le generara ingresos a la señor Ligia Benjumea. Al contrario en búsqueda en el ADRES se logró observar que la hoy demandante tiene afiliación al sistema de seguridad social contributiva, de manera continua, desde el 01 de febrero del 2022.

Corolario de todo lo expuesto, se tiene entonces, por una parte, que no concurren ninguno de los presupuestos necesarios para que el despacho acceda a la pretensión de la parte actora, y por la otra, que el supuesto perjuicio NO SE CAUSÓ, comoquiera queno existe prueba de que el señor Soto Raigosa ejercía labores lucrativas. En tal virtud, sin concurrir los presupuestos necesarios para acceder a esta tipología de perjuicio, está llamada al fracaso cualquier pretensión que con base en ello se formule.

Por todo lo expuesto, solicito declarar debidamente probada esta excepción.

## IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO DEL DAÑO EMERGENTE SOLICITADO POR LA PARTE ACTORA

Entre las pretensiones expuestas en la demanda, encontramos que la parte actora solicitó el reconocimiento de daños materiales en la modalidad de daño emergente. En este caso es completamente improcedente reconocimiento alguno de la solicitud del pago de $3.188.116, toda vez que no obran en el expediente ningún tipo de pruebas rectificada que permitan acreditar la existencia y cuantía de los perjuicios patrimoniales alegado. Además aunque se indica las razones de estos rubros, lo cierto es que no se aporta la factura, cuenta de cobro o documento equivalente que permita tener por cierto que la señora Ligia Benjumea o los otros demandantes fueron quienes efectivamente pagaron esa suma. Por ende, la falta de prueba trae como consecuencia la negación de esta pretensión.

Frente al daño emergente, es claro que la parte Demandante tenía entre sus mandatos como parte actora, toda la carga probatoria sobre los perjuicios deprecados en la demanda. Por lo tanto, la cuantía de los daños por los cuales se está exigiendo una indemnización deberán estar claramente probados a través de los medios idóneos que la ley consagra en estos casos. La honorable Corte Suprema de Justicia ha definido el daño emergente en los siguientes términos:

*“De manera,* ***que el daño emergente comprende la pérdida misma de elementos patrimoniales, las erogaciones que hayan sido menester o que en el futuro sean necesarios y el advenimiento de pasivo, causados por los hechos de los cuales se trata de deducirse la responsabilidad****.*

*Dicho en forma breve y precisa,* ***el daño emergente empobrece y disminuye el patrimonio, pues se trata de la sustracción de un valor que ya existía en el patrimonio del damnificado****; en cambio, el lucro cesante tiende a aumentarlo, corresponde a nuevas utilidades que la víctima presumiblemente hubiera conseguido de no haber sucedido el hecho ilícito o el incumplimiento.”[[19]](#footnote-19)* (Énfasis propio).

En este orden de ideas, es fundamental que el Despacho tome en consideración que la carga de la prueba de acreditar los supuestos perjuicios reside única y exclusivamente en cabeza de la parte Demandante. En este sentido, si dicha parte no cumple con su carga y en tal virtud, no acredita debida y suficientemente sus aparentes daños, es jurídicamente improcedente reconocer cualquier suma por dicho concepto. Esta teoría ha sido ampliamente desarrollada por la Corte Suprema de Justicia, debido a que, sobre este particular, ha establecido lo siguiente:

*“(…) aun cuando en la acción de incumplimiento contractual es dable reclamar el reconocimiento de los perjuicios, en su doble connotación de daño emergente y lucro cesante, no lo es menos que para ello resulta ineludible que el perjuicio reclamado tenga como causa eficiente aquel incumplimiento, y que los mismos sean ciertos y concretos y no meramente hipotéticos o eventuales, teniendo el reclamante la carga de su demostración, como ha tenido oportunidad de indicarlo, de manera reiterada.”[[20]](#footnote-20) (Subrayado fuera del texto original)*

Bajo esta misma línea, en otro pronunciamiento también ha indicado que la existencia de los perjuicios en ningún escenario se puede presumir, tal y como se observa a continuación:

*“Ya bien lo dijo esta Corte en los albores del siglo XX, al afirmar que “(…) la existencia de perjuicios no se presume en ningún caso; [pues] no hay disposición legal que establezca tal presunción (…)”[[21]](#footnote-21)* (Subrayado fuera del texto original)

Con fundamento de lo anterior, podemos concluir que el daño emergente comprende la pérdida de elementos patrimoniales, causada por los hechos que se aducen en el libelo de la demanda. En efecto, argumenta el extremo actor que la suma total de tres millones ciento ochenta y ocho mil ciento dieciséis de pesos ($3.188.116 m/cte) corresponde a los gastos en los que incurrió por fisioterapia, concepto de servicio doméstico, servicios de enfermería y por el pago del dictamen de pérdida de capacidad laboral. Respecto a estos debe manifestarse que, no obra dentro del plenario ninguna prueba que acredite el pago de estos montos o que si quiera estos son los montos debidos.

Así, en el expediente no obran pruebas pertinentes y útiles que acrediten las erogaciones manifestadas sobre estos conceptos, por lo cual no es posible reconocerlos. En ese sentido, la demanda careció de una carga probatoria que además de certera, fuera conducente con el fin de acreditar y demostrar el daño emergente. Lo anterior, en tanto tal como lo ha dispuesto la jurisprudencia, quien afirma una cosa es quien está obligado a probarla, supeditando a quien pretende o demanda un derecho, que lo alegue y demuestre los hechos que lo gestan o aquellos en que se funda, puesto que es absolutamente imperativo que se acredite procesalmente con los medios de convicción regular y oportunamente decretados y arrimados al plenario, ya que a nadie le es dado el privilegio de que su mero dicho sea prueba suficiente de lo que afirma.

En efecto, la consecuencia jurídica a la falta al deber probatorio en cabeza del demandante es sin lugar a dudas la negación de la pretensión.

Por todo lo anterior solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

# FRENTE A LOS MEDIOS DE PRUEBA SOLICITADOS POR LA PARTE DEMANDANTE

## RATIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PROVENIENTES DE TERCEROS

El artículo 262 del Código General del Proceso, preceptúa que:

*“Los documentos privados de contenido declarativo emanados de terceros se apreciarán por el juez sin necesidad de ratificar su contenido, salvo que la parte contraria solicite su ratificación”.*

Por supuesto esta ratificación concebida en la legislación procesal actual le traslada a quien quiere valerse de documentos provenientes de terceros, el deber de obtener su ratificación, cuando así lo requiere la parte contraria frente a la cual se aportan tales documentos. Resulta lógico que sea quien aporta los documentos provenientes de terceros, quien tenga en sus hombros dicha carga si es que quiere emplearlos como medio de convicción.

En tal virtud, pido que no se les reconozca valor a los siguientes documentos mientras el demandante no satisfaga el deber de logran que sean ratificados, en la forma en que lo pido de manera expresa aquí. Los documentos cuya ratificación debe lograr la demandante son:

* Certificación EMI del día y hora de atención emitido por la señora Beatriz Lopera Lopera
* Copia del Contrato de Servicio de enfermería emitida por Natalia Barahona
* Relación de sesiones de fisioterapia canceladas en efectivo emitidas por María del Rosario Cabal Concha.
* Recibo de pago a la señora Alba Totistar por servicio doméstico emitido por Alba Totistar.

## CONTRADICCIÓN DICTAMEN PERICIAL

En virtud de lo preceptuado en el artículo 228 del C.G.P., solicito la comparecencia del Raúl Giraldo Martínez, que suscribió el dictamen pericial adjunto a la demanda, a la audiencia de Instrucción y Juzgamiento, con el fin de que absuelva, bajo la gravedad de juramento, el interrogatorio acerca de su idoneidad e imparcialidad y sobre el contenido de los dictámenes que elaboraron.

# MEDIOS DE PRUEBA

## INTERROGATORIOS DE PARTE

* 1. Respetuosamente solicito ordenar y hacer comparecer a su despacho a la señora LIGIA BENJUMEA DE BOTERO, para que en audiencia pública absuelva el interrogatorio que verbalmente o mediante cuestionario escrito le formularé sobre los hechos de la demanda, de la contestación, y en general, de todos los argumentos de hecho y de derecho expuestos en este litigio.
  2. Respetuosamente solicito ordenar y hacer comparecer a su despacho al señor JOSÉ ALEJANDRO BOTERO BENJUMEA, para que en audiencia pública absuelva el interrogatorio que verbalmente o mediante cuestionario escrito le formularé sobre los hechos de la demanda, de la contestación, y en general, de todos los argumentos de hecho y de derecho expuestos en este litigio.
  3. Respetuosamente solicito ordenar y hacer comparecer a su despacho a la señora ANA MARÍA BOTERO BENJUMEA, para que en audiencia pública absuelva el interrogatorio que verbalmente o mediante cuestionario escrito le formularé sobre los hechos de la demanda, de la contestación, y en general, de todos los argumentos de hecho y de derecho expuestos en este litigio.
  4. Respetuosamente solicito ordenar y hacer comparecer a su despacho al señor ALBERTO HINCAPIE SALAZAR, para que en audiencia pública absuelva el interrogatorio que verbalmente o mediante cuestionario escrito le formularé sobre los hechos de la demanda, de la contestación, y en general, de todos los argumentos de hecho y de derecho expuestos en este litigio.
  5. Respetuosamente solicito ordenar y hacer comparecer a su despacho al señor JUAN MANUEL HINCAPIE BOTERO, para que en audiencia pública absuelva el interrogatorio que verbalmente o mediante cuestionario escrito le formularé sobre los hechos de la demanda, de la contestación, y en general, de todos los argumentos de hecho y de derecho expuestos en este litigio.
  6. Respetuosamente solicito ordenar y hacer comparecer a su despacho a la señora MARIA JULIANA HINCAPIE BOTERO, para que en audiencia pública absuelva el interrogatorio que verbalmente o mediante cuestionario escrito le formularé sobre los hechos de la demanda, de la contestación, y en general, de todos los argumentos de hecho y de derecho expuestos en este litigio.
  7. Respetuosamente solicito ordenar y hacer comparecer a su despacho al señor JOSÉ GABRIEL HINCAPIE BOTERO, para que en audiencia pública absuelva el interrogatorio que verbalmente o mediante cuestionario escrito le formularé sobre los hechos de la demanda, de la contestación, y en general, de todos los argumentos de hecho y de derecho expuestos en este litigio

## DECLARACIÓN DE PARTE

* 1. Conforme a lo establecido en el Art. 198 del C.G.P., solicito se haga comparecer al representante legal de **COSMOCENTRO CIUDADELA CENTRO COMERCIAL P.H.** para que sea interrogado por el suscrito, sobre los hechos referidos en la contestación de la demanda y, especialmente, para exponer y aclarar los amparos, exclusiones, términos y condiciones de la Póliza de Autos vinculada a este litigio.

## INTERVENCIÓN EN DOCUMENTALES Y TESTIMONIOS

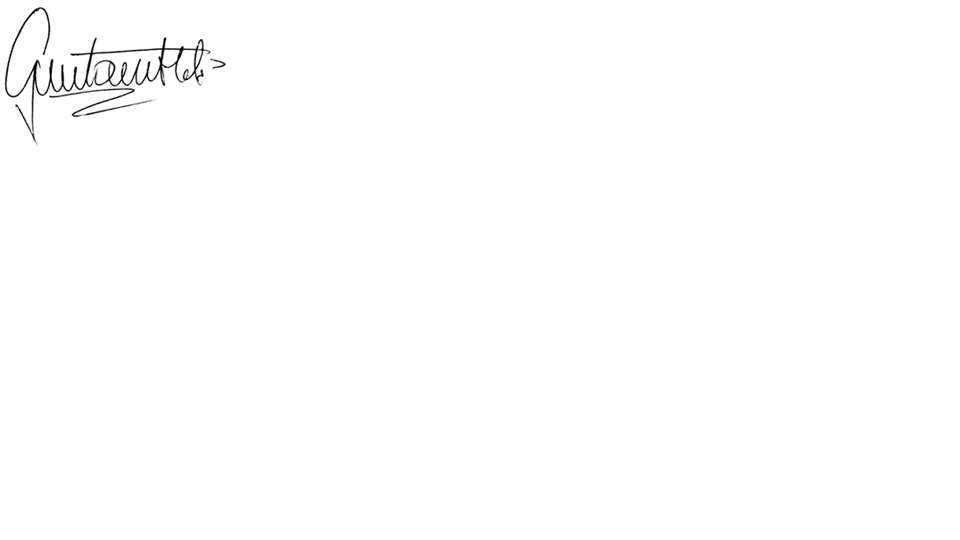
Con el objeto de probar los hechos materia de las excepciones de mérito, nos reservamos el derecho de contradecir las pruebas documentales presentadas al proceso y participar en la práctica de las testimoniales que lleguen a ser decretadas, así como del correspondiente interrogatorio de parte e intervenir en las diligencias de ratificación y otras pruebas solicitadas.

# ANEXOS

1. Poder otorgado por parte de Ricardo Bonilla Sánchez en su calidad de Representante Legal de Cosmocentro Ciudadela Centro Comercial P.H.
2. Certificado de Personería Jurídica de mi representada, expedido por la Alcaldía de Cali.

# NOTIFICACIÓNES.

* La parte actora en la dirección consignada en la demanda.
* Por mi representada SBS Seguros Colombia S.A. se recibirán notificaciones en la Calle 78 No. 9-57 Piso 2 de Bogotá D.C., dirección de notificaciones [notificaciones.sbseguros@sbseguros.co](mailto:notificaciones.sbseguros@sbseguros.co)
* El suscrito en la Avenida 6A Bis No. 35N-100, Centro Empresarial Chipichape, Oficina 212 de la ciudad de Cali. Email: [notificaciones@gha.com.co](mailto:notificaciones@gha.com.co).

Cordialmente,

**GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA**

C.C. No. 19.395.114 de Bogotá D. C.

T.P. No. 39.116 del C. S. J.

1. Patino, Héctor: Las causales exonerativas de la responsabilidad extracontractual. ¿Por qué y cómo impiden la declaratoria de responsabilidad? Aproximación a la jurisprudencia del Consejo de Estado. 24 de febrero de 2011. Universidad Externado de Colombia [↑](#footnote-ref-1)
2. Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, 23 de noviembre de 1990, G.J. CCIV, pág. 69. [↑](#footnote-ref-2)
3. Artavia, S. & Picado, C (2012), [↑](#footnote-ref-3)
4. Herrera, J.(2021) [↑](#footnote-ref-4)
5. Ibídem [↑](#footnote-ref-5)
6. Corte Suprema de Justicia sentencia de fecha 16 de diciembre de 2010, Sala de Casación Civil, Exp. 200401074 [↑](#footnote-ref-6)
7. Auto de la Sala 1ª de lo Civil de 16 de Mayo de 2018, rec. 543/2016. [↑](#footnote-ref-7)
8. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, Sentencia del 18 de diciembre del 2018, expediente 88001-3103-002-2005-00031-01. [↑](#footnote-ref-8)
9. Patino, Héctor: Las causales exonerativas de la responsabilidad extracontractual. ¿Por qué y cómo impiden la declaratoria de responsabilidad? Aproximación a la jurisprudencia del Consejo de Estado. 24 de febrero de 2011. Universidad Externado de Colombia [↑](#footnote-ref-9)
10. Corte Suprema de Justica.  Sala de Casación Civil. Sentencia del 6 de mayo de 2016. Rad: 2004- 032 (M.P: Luis Armando Tolosa Villabona)   [↑](#footnote-ref-10)
11. Ídem [↑](#footnote-ref-11)
12. Cfr. TSDJ. De Pereira. Sentencia de segundo grado. Rad. 05001-31-03-005-2005-00142-01. MG. Sustanciador Duberney Grisales Herrera (en descongestión) [↑](#footnote-ref-12)
13. Corte Suprema de Justicia. Sala Civil. SC fechado el 15 de agosto de 2004. Exp.6199 [↑](#footnote-ref-13)
14. Sala de Casación Civil. Corte Suprema de Justicia 06 de mayo de 2016. Radicado. 54001-31-03-004-2004-00032-01 [↑](#footnote-ref-14)
15. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 13 de mayo de 2008, radicado 11001-3103-006-1997-09327-01. [↑](#footnote-ref-15)
16. Corte Suprema de Justicia. SC9193-2017 del 29 de marzo de 2017. M.P.: Ariel Salazar Ramírez. [↑](#footnote-ref-16)
17. Corte Suprema de Justicia. Sentencia Rad. 2000-01141 del 24 de junio de 2008. [↑](#footnote-ref-17)
18. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. SC4966-2019. Expediente 2011-00298. M.P. Ángel Alonso Rico Puerta. [↑](#footnote-ref-18)
19. Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 07 de diciembre de 2017. M.P. Margarita Cabello Blanco. SC201448-2017 [↑](#footnote-ref-19)
20. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 15 de febrero de 2018. MP. Margarita Cabello Blanco. EXP: 2007-0299. [↑](#footnote-ref-20)
21. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 12 de junio de 2018. MP Luis Armando Tolosa Villabona. EXP: 2011-0736 [↑](#footnote-ref-21)